

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 67 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-27742-2016
CARATULADO	: NARVÁEZ / HERNÁNDEZ

Santiago, veinticinco de Octubre de dos mil diecisiete

VISTOS.

A fojas 1, compareció doña **JUANA LAURA NARVAEZ DINAMARCA**, trabajadora, con domicilio en Fernando Lazcano 1529, departamento 201, comuna de San Miguel, e interpuso demanda de rendición de cuentas en procedimiento sumario en contra de don **HÉCTOR DEL CARMEN HERNÁNDEZ MORAGA**, cuya profesión u oficio ignora, con domicilio en Tristán Valdés 155-A, comuna de Maipú; y solicitó que se tuviera por interpuesta la demanda y se declarara que el demandado se encuentra obligado a rendir cuentas por la gestión de su administración.

Fundamentó su pretensión en que el año 1979 un grupo de corredores de seguros de vida, crearon el Sindicato en la Compañía de seguros La Previsión en el cual se designó como presidente el señor Héctor Hernández Moraga, que después del tiempo, resultó ser prácticamente un cargo vitalicio, porque hasta la fecha sigue como presidente del sindicato, del que según él quedarían 8 socios. Añadió que ese mismo año, con aporte de los socios, se compraron 25.000 acciones de la Compañía de seguros La Previsión Vida, hoy Security Vida y 25.000 acciones de la Compañía de seguros La Previsión Generales, hoy PENTA Security, vendida recientemente a Liberty Seguros.

Señaló que de los corredores que formaron el sindicato y que compraron las acciones, ya han fallecido muchos y los otros han renunciado, cansados de pagar cuotas sin tener ninguna información sobre los dividendos que generan las acciones. Tampoco hay, desde hace varios años, una oficina donde se puedan hacer consultas, y solo existen descuentos para pagos de funcionamiento del sindicato, lo que no se traduciría en ninguna utilidad ni beneficio para sus asociados. Agregó haber ido a las oficinas de la corredora de bolsa que lleva las acciones de las compañías en cuestión, para que le dieran información y sólo



«RIT»

Foja: 1

logró una respuesta verbal, por no ser parte de la directiva del sindicato, pero le indicaron que el cinco de Septiembre del año 2006 fueron vendidas las acciones de la Previsión Vida a la corredora BANCHILE, lo que significaría que el señor Hernández vendió sin consultarle a nadie. Además, por los abogados de la Superintendencia de Valores se enteró que para obtener un certificado sobre ésta transacción, la debe solicitar el tribunal al Depósito Central de Valores.

Expresó que de lo expuesto y de acuerdo a la normativa común, se verifican en la especie los derechos y obligaciones del contrato de mandato en los términos del artículo 2.116 del Código Civil, en la medida que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. En efecto, al presidente del sindicato se le encargó la gestión de administrar el mismo, quien se hizo cargo de ellos por cuenta y riesgo de la demandante. Por lo anterior, es plenamente aplicable en la especie el artículo 2.155 del Código Civil, que contiene la obligación de dar cuenta de su administración, la que siempre existiría en nuestro ordenamiento jurídico, cuando se administra bienes y dineros ajenos.

A fojas 9, consta notificación personal subsidiaria en conformidad con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, de don Héctor del Carmen Hernández Moraga, con fecha 10 de abril de 2017.

A fojas 13, consta realización de audiencia decretada en autos, con la asistencia de los apoderados de ambas partes. La demandante ratificó la demanda en todas sus partes y solicitó que fuese acogida con costas.

La parte demandada contestó la demanda de autos deducida en su contra, señalando que esta debe ser rechazada por cuando no se fundamenta a en ninguna de las causales contempladas en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, ya que no es posible fundarla en el plazo designado por la ley, y no se encuentra establecida por convenio de las partes o por resolución judicial. Agregó que de tal manera, la posible obligación de rendir cuenta se encuentra en todo caso prescrita, ya que han transcurrido cerca de 40 años desde la fecha que se señala en la demanda, de modo que alega la prescripción, sea la adquisitiva o extintiva.

Afirmó que durante el lapso que se indicó no existe ningún antecedente que implique que el demandado deba dar cuenta de alguna adquisición accionaria que hizo con dineros propios y a su nombre. En tal sentido, la representación sería una modalidad de los actos jurídicos de modo que el que la alega a favor o en contra,



«RIT»

Foja: 1

le corresponde probarla. Finalmente señaló que los hechos en que se funda la acción no son efectivos, por lo que debe rechazarse la demanda, con costas.

El tribunal tuvo por contestada la demanda. Acto seguido, se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo por desacuerdo de las partes.

En el mismo acto se recibió la causa a prueba por término legal, y se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales, la misma debió recaer, rindiéndose la que consta en autos.

A fojas 66, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, en autos compareció doña Juana Laura Narváez Dinamarca, e interpuso demanda de rendición de cuentas en procedimiento sumario en contra de don Héctor del Carmen Hernández Moraga, en base a los argumentos de hecho y de derechos reseñados en la parte expositiva de esta resolución los que se dan por reproducidos para los efectos procesales pertinentes.

SEGUNDO: Que, válidamente emplazada, la demandada contestó la demanda de autos deducida en su contra, solicitando el rechazo de la misma con costas, y opuso además excepción de prescripción, todo en base igualmente a los argumentos reseñados en la parte expositiva del presente fallo.

TERCERO: Que, la presente litis quedó configurada de modo tal, que las partes debieron allegar al proceso las probanzas correspondientes, a fin de acreditar los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) Efectividad de existir la obligación de rendir cuenta de la demandada para con la demandante. Hechos y circunstancias; 2) Si se dan los presupuestos legales para declarar la prescripción de la obligación de rendir cuenta demandada en autos.

CUARTO: Que, la parte demandante con el fin de acreditar sus asertos, acompañó al proceso, en lo pertinente, los siguientes instrumentos.

1. A fojas 16 a 29, Copia autorizada ante Notario de estatutos de “Sindicato Nacional de Trabajadores productores de seguros de la Empresa Compañía de Seguros La Previsión”, Rol único Tributario N° 99.022.000-K, con domicilio en calle Huérfanos 1373, oficina 1204, comuna de Santiago.



«RIT»

Foja: 1

2. A fojas 40 a 55, Oficio de la Dirección del Trabajo donde acompañó copia fiel de los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores productores de seguros de la Empresa Compañía de Seguros La Previsión, de idéntico tenor de los acompañados por la demandante, y certificado N° 1301/2017/6459 donde se constata que don Héctor del Carmen Hernández Moraga detenta el cargo de presidente de la organización sindical desde el 9 de enero de 2015 hasta el 9 de enero del 2018.

3. A fojas 61 a 63, Oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se indica que el Sindicato Nacional de Trabajadores productores de seguros de la Empresa Compañía de Seguros La Previsión al 30 de junio de 2017, registra 898 acciones de Compañía de Seguros Generales Penta S.A, a su nombre, serie única.

QUINTO: Que, la parte demandada no rindió prueba alguna durante el término legal decretado para el efecto.

SEXTO: Que, dentro las defensas planteadas por la demandada, opuso la excepción de prescripción, la que por su naturaleza debe resolverse previamente a entrar a conocimiento del fondo de la cuestión sometida a conocimiento de esta magistratura.

La demandada sustentó dicha excepción, en que la posible obligación de rendir cuenta por la que se le demanda se encontraría prescrita, ya que han transcurrido cerca de 40 años desde la fecha que se señala en el libelo, y que durante dicho lapso de tiempo, no existiría ningún antecedente que implique que su parte debe dar cuenta de alguna adquisición accionaria que habría realizado con dineros propios y a su nombre.

SÉPTIMO: Que, según lo dispone el artículo 2.492 del Código Civil, la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

En tal sentido, corresponde determinar si en el caso de marras se dan las condiciones establecidas por el legislador para que opere la excepción de prescripción en los términos planteados. Como primer elemento, se requiere según lo dispuesto en el artículo 2.493 del Código Civil que, el que quiera aprovecharse de ella, la alegue, cuestión que se da en la especie, pues como se ha venido relatando, la demandada invocó la prescripción en la audiencia de estilo celebrada en autos, conjuntamente al contestar la demanda. Luego, se requiere el



«RIT»

Foja: 1

transcurso del tiempo conforme a los artículos 2.514 y 2.515 del Código de Bello, y que durante el mismo, no haya operado interrupción alguna, como contempla el artículo 2.518 del citado cuerpo normativo.

OCTAVO: Que, de los hechos relatados en la demanda, se advierte que como primera fecha la demandante indicó que en el año 1979 un grupo de corredores de seguros de vida crearon el Sindicato en la Compañía de seguros La Previsión, en el cual se designó como presidente el señor Héctor Hernández Moraga, demandado en este proceso, y que ese mismo año, con aporte de los socios, se compraron 25.000 acciones de la Compañía de seguros La Previsión Vida, hoy Security Vida, y 25.000 acciones de la Compañía de seguros La Previsión Generales, hoy PENTA Security, vendida recientemente a Liberty Seguros. Luego, como segunda fecha, afirmó que el 5 de septiembre del año 2006, fueron vendidas las acciones de la Previsión vida a la Corredora BANCHILE.

En base a las épocas previamente señaladas, habrían nacido los derechos y obligaciones del contrato de mandato en los términos del artículo 2.116 del Código Civil, y por ello el deber del demandado como mandatario de la organización sindical, de dar cuenta de su administración en los términos del artículo 2.155 del mismo cuerpo normativo, por lo que en definitiva pide que este Tribunal declare la existencia de dicha obligación.

NOVENO: Que, en virtud de la acción interpuesta, la que busca que se declare la existencia de una obligación, debe entenderse que la misma tiene una naturaleza ordinaria, y por ello, se encuadra dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 2.515 del Código de Bello, que sostiene que el plazo de prescripción para dichas acciones es de cinco años.

En atención a que la parte demandada controvertió expresamente los hechos en que se basa la acción, no puede entenderse que haya operado una interrupción natural, y la interrupción civil, dada por la presentación de la demanda para el conocimiento de esta magistratura y su posterior notificación a quien alega la prescripción, ocurrida con fecha 10 de abril de 2017, debe entenderse meridianamente que, para ambas épocas señaladas en el libelo –año 1979 y 2006- ya habían transcurrido latamente los lapsos de tiempo exigidos por el legislador, lo que natural y lógicamente configura plenamente todos los requisitos necesarios para dar lugar a la excepción opuesta, como se expresará en lo resolutivo.



«RIT»

Foja: 1

DÉCIMO: Que, por todo lo que se ha venido considerando y en atención a que al acogerse la excepción de prescripción, la acción no podrá prosperar, resulta inoficioso avocarse al conocimiento del fondo del asunto, razón por la cual, se rechazará la demanda en todas sus partes.

UNDÉCIMO: Que, la parte demandante al haber resultado totalmente vencida en los términos del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, será condena al pago de las costas generadas en la presente causa.

Por estas consideraciones y visto y lo dispuesto en los artículos 2.116, 2.155, 2.492, 2.493, 2.514, 2.515, 2.518 y demás pertinentes del Código Civil, artículos 160, 170, 254 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I. Que, se acoge la excepción de prescripción opuesta por el demandado a fojas 13, y en consecuencia, se **rechaza** en todas sus partes la demanda de autos interpuesta por doña Juana Laura Narváez Dinamarca en contra de don Héctor del Carmen Hernández Moraga.

II. Que, se condena en costas a la demandante.

DICTADA POR DOÑA MARISEL CANALES MOYA, JUEZ SUPLENTE DEL VIGÉSIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZA DON JOSÉ FRANCISCO SOTELO LUCERO, SECRETARIO SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticinco de Octubre de dos mil diecisiete**

